



Asamblea General

Distr. general
23 de enero de 2020
Español
Original: inglés

Consejo de Derechos Humanos Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria

Opiniones aprobadas por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria en su 86º período de sesiones, 18 a 22 de noviembre de 2019

Opinión núm. 59/2019, relativa a Mohamed Merza Ali Moosa (Bahrein)

1. El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria fue establecido en virtud de la resolución 1991/42 de la Comisión de Derechos Humanos. En su resolución 1997/50, la Comisión prorrogó y aclaró el mandato del Grupo de Trabajo. Con arreglo a lo dispuesto en la resolución 60/251 de la Asamblea General y en la decisión 1/102 del Consejo de Derechos Humanos, el Consejo asumió el mandato de la Comisión. La última vez que el Consejo prorrogó el mandato del Grupo de Trabajo por tres años fue en su resolución 42/22.
2. De conformidad con sus métodos de trabajo (A/HRC/36/38), el Grupo de Trabajo transmitió el 10 de julio de 2019 al Gobierno de Bahrein una comunicación relativa a Mohamed Merza Ali Moosa. El Gobierno respondió a la comunicación el 6 de septiembre de 2019. El Estado es parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
3. El Grupo de Trabajo considera arbitraria la privación de libertad en los casos siguientes:
 - a) Cuando es manifiestamente imposible invocar fundamento jurídico alguno que la justifique (como el mantenimiento en reclusión de una persona tras haber cumplido su condena o a pesar de una ley de amnistía que le sea aplicable) (categoría I);
 - b) Cuando la privación de libertad resulta del ejercicio de los derechos o libertades garantizados por los artículos 7, 13, 14, 18, 19, 20 y 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y, respecto de los Estados partes, por los artículos 12, 18, 19, 21, 22, 25, 26 y 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (categoría II);
 - c) Cuando la inobservancia, total o parcial, de las normas internacionales relativas al derecho a un juicio imparcial, establecidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los instrumentos internacionales pertinentes aceptados por los Estados interesados, es de una gravedad tal que confiere a la privación de libertad carácter arbitrario (categoría III);
 - d) Cuando los solicitantes de asilo, inmigrantes o refugiados son objeto de detención administrativa prolongada sin posibilidad de examen o recurso administrativo o judicial (categoría IV);
 - e) Cuando la privación de libertad constituye una vulneración del derecho internacional por tratarse de discriminación por motivos de nacimiento, origen nacional, étnico o social, idioma, religión, condición económica, opinión política o de otra índole,



género, orientación sexual, discapacidad u otra condición, que lleva o puede llevar a ignorar el principio de igualdad de los seres humanos (categoría V).

Información recibida

Comunicación de la fuente

4. Mohamed Merza Ali Moosa es un destacado atleta bahreiní de 46 años, que ganó varias medallas de oro en competiciones internacionales de *jiu-jitsu* en el Brasil, Tailandia y los Emiratos Árabes Unidos entre 2008 y 2010. El Sr. Moosa fue una de las miles de personas de Bahrein que se unieron a los llamamientos en favor de un gobierno más democrático y un mayor respeto de los derechos humanos en el país, durante la Primavera Árabe, en febrero de 2011.

Detención, tortura y juicio sin las debidas garantías

5. La fuente informa de que, el 16 de marzo de 2011, el Sr. Moosa fue detenido por agentes de policía en un puesto de control situado en la intersección de la mezquita del Sheij Aziz, en la zona de Sehla Meridional. Según la fuente, el Sr. Moosa fue detenido sin que mediara una orden judicial y sin ser informado de los motivos. La fuente alega que los agentes profirieron insultos y amenazas contra el Sr. Moosa durante la detención, lo introdujeron en el maletero de un vehículo de policía y lo trasladaron a la comisaría de Al-Jamis. Una vez allí, el jefe de la comisaría agredió al Sr. Moosa en presencia de testigos. El mismo día, el Sr. Moosa fue trasladado a la comisaría de Ciudad Hamad, donde fue torturado por un grupo de policías. La fuente alega además que el Sr. Moosa fue víctima de desaparición forzada y que su familia ignoró su paradero durante tres meses, hasta que se le notificó la fecha de su primera comparecencia ante el tribunal.

6. Según la fuente, tras su detención, los agentes de policía mantuvieron al Sr. Moosa con los ojos vendados durante tres días consecutivos. El 25 de marzo de 2011, el Sr. Moosa fue trasladado a la comisaría de Al-Noaim y luego a la de Al-Qudaibiya, donde un guardia lo torturó. En todos esos casos, agentes de policía amenazaron al Sr. Moosa con llevar a familiares suyos a la comisaría y torturarlos. El 10 de abril de 2011, el Sr. Moosa fue trasladado al Centro de Detención Dry Dock, donde fue torturado por un grupo de militares y agentes vestidos de civil. A mediados de abril de 2011, fue trasladado a la Prisión Militar de Al-Qurain, donde de nuevo fue torturado por miembros de las Fuerzas de Defensa de Bahrein y agentes vestidos de civil.

7. La fuente alega que en todas las comisarías de policía mencionadas, así como en el Centro de Detención Dry Dock y en la Prisión Militar de Al-Qurain, los agentes privaron de sueño al Sr. Moosa valiéndose de diversos medios, entre ellos el acoso y la intimidación durante su tiempo de descanso; no le permitieron asearse ni usar el retrete, obligándolo a defecar y orinar en su ropa; lo obligaron a permanecer de pie durante largas horas, a veces durante días; lo obligaron a permanecer desnudo y lo sometieron a agresiones sexuales, y lo mantuvieron en una habitación fría mientras derramaban agua fría sobre él durante los meses de invierno. Además, la fuente informa de que los agentes obligaron al Sr. Moosa a maldecir los símbolos de la oposición política, a imitar sonidos de animales y a cantar el himno nacional de Bahrein. Los agentes insultaron a la comunidad chií y a sus líderes religiosos. También mantuvieron al Sr. Moosa inmovilizado atándole las manos a los pies por detrás del cuerpo y lo colgaron de las muñecas y los pies durante muchas horas. Lo golpearon brutalmente con cables eléctricos y tuberías de agua, le propinaron patadas y bofetadas y le escupieron en la cara.

8. Según la fuente, alrededor de mayo de 2011, un empleado militar del Tribunal de Seguridad Nacional llamó a los familiares del Sr. Moosa y los informó de la fecha de su primera vista ante el tribunal. Esa vista tuvo lugar el mismo día que la primera visita de los familiares del Sr. Moosa. Según la fuente, los Tribunales de Seguridad Nacional estuvieron en funcionamiento durante el estado de emergencia que siguió a las protestas y estaban integrados por un juez militar presidente y dos jueces civiles. También ejercían la acusación miembros del ejército. Posteriormente esos tribunales se disolvieron y sus decisiones se sometieron a revisión civil a raíz de que la Comisión Independiente de Investigación de Bahrein concluyera que no se respetaban los principios fundamentales de un juicio con las

debidas garantías, entre ellos el acceso pronto y efectivo a asistencia letrada y la inadmisibilidad de las declaraciones obtenidas mediante coacción.

9. El 19 de mayo de 2011, el Tribunal de Seguridad Nacional de Primera Instancia condenó al Sr. Moosa y a otros ocho coacusados por intento de secuestro de un agente de policía y los condenó a 20 años de prisión. Solo uno de los acusados fue absuelto. El Sr. Moosa afirma que no había conexión alguna entre él y los otros coacusados y que no los conocía personalmente. Además, la fuente alega que cinco testigos declararon que el Sr. Moosa se encontraba en otro lugar en el momento del intento de secuestro, pero el juez no tuvo en cuenta su testimonio. El presunto intento de secuestro se produjo dos días antes de la detención del Sr. Moosa. La fuente considera que el Sr. Moosa fue objeto de persecución por haber participado en protestas en favor de la democracia en 2011, ya que muchos otros atletas también fueron perseguidos y detenidos.

10. El 12 de julio de 2011, el Sr. Moosa fue trasladado de la prisión de Al-Qurain a la prisión de Jau, donde, según se informa, de nuevo fue torturado con los mismos métodos. El Sr. Moosa sigue recluso en la prisión de Jau.

11. El 22 de julio de 2011, tras presentar un recurso, la condena del Sr. Moosa fue reducida a 15 años de prisión, al igual que las de los demás coacusados. El 9 de enero de 2012, el Tribunal de Casación anuló la sentencia dictada en apelación y remitió el caso al Primer Tribunal Superior de Apelación para que procediera a revisar su decisión. El 14 de agosto de 2012, el Primer Tribunal Superior de Apelación redujo la condena del Sr. Moosa a 10 años de prisión, pero todos los demás coacusados fueron absueltos. Según la fuente, el Sr. Moosa no dispuso del tiempo ni los medios adecuados para preparar el juicio y se le impidió consultar con su abogado. El Sr. Moosa no interpuso ningún otro recurso ante el Tribunal de Casación.

12. La fuente alega que el Sr. Moosa fue torturado de nuevo en la Fiscalía y en los pasillos de los tribunales, donde el fiscal militar de las Fuerzas de Defensa de Bahrein lo coaccionó para que firmara declaraciones y documentos. Según la fuente, cuando el Sr. Moosa solicitó leer esos documentos, fue torturado y amenazado con emplear armas contra él.

Denegación de atención médica

13. Según la fuente, se ha descuidado la salud del Sr. Moosa desde su detención. El Sr. Moosa padece discopatía degenerativa, desgaste de la articulación de la rodilla derecha, desgarró del ligamento cruzado anterior, rotura de piezas dentales y lesiones en el lado derecho del maxilar inferior. La fuente alega que todas estas lesiones fueron resultado de la tortura y la posterior falta de atención médica.

14. La fuente informa de que la familia del Sr. Moosa ha presentado cinco quejas relativas a su salud ante las autoridades de la prisión de Jau y varias denuncias ante la Oficina del Defensor del Pueblo del Ministerio del Interior en relación con su salud y con los presuntos actos de tortura. El 8 de octubre de 2017, el Defensor del Pueblo informó a la familia del Sr. Moosa de que el examen de la denuncia había puesto de manifiesto la posible existencia de un delito grave que era competencia de la Dirección de Tribunales Militares y que la investigación se había remitido a esa Dirección el 5 de octubre de 2017. La familia del Sr. Moosa no ha recibido más información sobre esas denuncias.

15. Además, la familia del Sr. Moosa presentó denuncias ante la Institución Nacional de Derechos Humanos y la Comisión de Derechos de Presos y Detenidos. Sin embargo, el Sr. Moosa no ha recibido ni la atención médica ni el tratamiento que necesita. No lo examinó ningún médico hasta tres meses después de su detención, y se le administraron analgésicos. Según la fuente, los informes médicos y las radiografías del Sr. Moosa realizados en Hospital Militar de las Fuerzas de Defensa de Bahrein y el Complejo Médico de Salmaniya dan fe de su estado de salud. El Sr. Moosa no tenía problemas de salud antes de su detención, ya que era atleta y se cuidaba.

Acontecimientos recientes

16. El 18 de agosto de 2018, tras presentar varias denuncias que no obtuvieron respuesta ante las autoridades penitenciarias, la Institución Nacional de Derechos Humanos y el Defensor del Pueblo, el Sr. Moosa inició una huelga de hambre de 40 días en solidaridad con su compañero de prisión, un defensor de los derechos humanos y preso político que cumple una condena de prisión perpetua. El Sr. Moosa puso fin a su huelga de hambre el 27 de septiembre de 2018. De acuerdo con la fuente, el Sr. Moosa llamó por última vez a un familiar el 12 de febrero de 2019, antes de ser puesto en régimen de aislamiento. Se desconoce la fecha exacta en que esto sucedió, así como el motivo o la justificación para ello. El Sr. Moosa lleva más de ocho años privado de libertad, desde que fue detenido en marzo de 2011.

Análisis jurídico

17. La fuente afirma que la privación de libertad del Sr. Moosa es arbitraria y se inscribe en las categorías II, III y V.

18. En relación con la categoría II, la fuente afirma que la privación de libertad del Sr. Moosa fue resultado del ejercicio de los derechos que lo asisten en virtud de los artículos 18, 19 y 20 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y de los artículos 18, 19 y 26 del Pacto.

19. En relación con la categoría III, la fuente sostiene que el Sr. Moosa fue objeto de numerosas violaciones de los derechos humanos, como haber sido detenido y encarcelado sin una orden judicial; haber sido sometido a desaparición forzada; haber sido obligado a confesar bajo coacción; haber sido privado del derecho de ser llevado ante un juez; habérsele negado el acceso a su abogado; haber sido juzgado como civil ante un tribunal militar; y haber sido privado del tiempo y los medios adecuados a fin de prepararse para el juicio. La fuente sostiene que el Sr. Moosa fue sometido a un juicio sin las debidas garantías, lo que supone una vulneración de la legislación de Bahrein¹ y de los artículos 9 y 14 del Pacto.

20. Por lo que se refiere a la categoría V, la fuente afirma que la privación de libertad del Sr. Moosa fue discriminatoria, ya que se basó en su opinión política o de otra índole, lo que supone una violación de los artículos 2 y 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y de los artículos 2, 19 y 26 del Pacto.

21. Por último, la fuente sostiene que el hecho de infligir intencionadamente graves dolores físicos a fin de obtener una confesión supuso una conculcación de las obligaciones de Bahrein en virtud de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Además, los malos tratos a que fue sometido el Sr. Moosa y la denegación de atención médica vulneraron el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como las reglas 1, 24, 27 y 31 de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (las Reglas Nelson Mandela).

Respuesta del Gobierno

22. El 10 de julio de 2019, el Grupo de Trabajo transmitió las alegaciones de la fuente al Gobierno en el marco de su procedimiento ordinario de comunicaciones. El Grupo de Trabajo solicitó al Gobierno que presentara información detallada, a más tardar el 9 de septiembre de 2019, sobre la situación actual del Sr. Moosa. El Grupo de Trabajo pidió asimismo al Gobierno que aclarase las disposiciones legales que justificaban que continuase recluido, así como su compatibilidad con las obligaciones contraídas por Bahrein en virtud del derecho internacional de los derechos humanos. Además, el Grupo de Trabajo exhortó al Gobierno a que velase por la integridad física y mental del Sr. Moosa. El Gobierno envió su respuesta el 6 de septiembre de 2019.

23. En su respuesta, el Gobierno resume la historia de la agresión a un agente de policía, presuntamente cometida por el Sr. Moosa y otras personas. El 14 de marzo de 2011, el

¹ Constitución de Bahrein, 14 de febrero de 2002, art. 19 a) y b).

agente se dirigía en su propio vehículo a trabajar en la comisaría de policía de Al-Jamis, cuando recibió una llamada telefónica de la comisaría para informarlo de la presencia de varias personas reunidas ilegalmente frente a esta. El agente llamó a tres compañeros y les pidió que acudieran a la comisaría. De camino, fue atacado por un grupo de personas, entre las que se contaba el Sr. Moosa. Según el Gobierno, el grupo rodeó al agente, lo golpeó con objetos metálicos pesados y tablones de madera, lo secuestró y lo retuvo durante un día en el Complejo Médico de Salmaniya. Al día siguiente, el agente fue localizado y recibió atención médica para curar sus lesiones.

24. Según el Gobierno, se tomó declaración al agente el 14 de marzo de 2011 y se detuvo al Sr. Moosa el 16 de marzo de 2011. La fiscalía ordenó la reclusión del Sr. Moosa durante 60 días a partir del 26 de marzo de 2011 y dispuso que el agente fuera sometido a un examen médico forense. El informe forense confirmó que el agente había sufrido graves lesiones en la cabeza, la cara, las extremidades y la espalda debido a los objetos contundentes que el grupo había utilizado cuando lo atacó con el propósito de causarle lesiones. El agente no se recuperó por completo y se sometió a un nuevo examen médico. Consultó a varios médicos, que aportaron informes escritos que confirmaban las lesiones provocadas cuando fue secuestrado y retenido. De resultas de ello, la fiscalía acusó al Sr. Moosa de:

a) Secuestrar y agredir a un agente de policía cuando este se dirigía a su lugar de trabajo (un delito grave);

b) Participar en una reunión ilegal cuyo propósito era alterar el orden público, en virtud de los artículos 107, 178, 357, párrafos 1 a 3 y 6, y 358, párrafos 1 y 3, del Código Penal, y los artículos 1, 2, párrafo 1, y 3, párrafo 4, de la Ley de Protección de la Sociedad contra Actos Terroristas (Ley núm. 58, de 2006).

25. El Gobierno afirma que la fiscalía puso al Sr. Moosa y a otras nueve personas a disposición del Tribunal de Primera Instancia el 16 de abril de 2011. El tribunal ordenó al Sr. Moosa que se sometiera a un examen médico forense el 25 de abril de 2011. Los resultados pusieron de manifiesto que el Sr. Moosa presentaba una herida leve en la frente que había sido causada unos días antes por contacto con una superficie sólida y áspera. La herida era superficial, y en el examen se concluyó que el proceso de curación duraría hasta diez días y no entrañaba ningún riesgo de daño permanente. Además, el examen indicó que la decoloración que se apreciaba alrededor de las muñecas del Sr. Moosa se debía a que había sido esposado. Según el Gobierno, el examen médico no mostró que el Sr. Moosa tuviera ninguna otra lesión, y se observó que la movilidad de las articulaciones era normal y estas no presentaban ninguna disfunción.

26. Después de celebrar varias vistas en las que estuvo presente el abogado del Sr. Moosa, el Tribunal dictó sentencia el 19 de mayo de 2011, condenándolo a 20 años de prisión en base a las pruebas presentadas. El Sr. Moosa recurrió la sentencia el 22 de junio de 2011, lo que resultó en una reducción de la pena a 15 años de prisión.

27. De acuerdo con el Gobierno, no hay pruebas de que la policía sometiera al Sr. Moosa a desaparición forzada durante el estado de emergencia. Un funcionario del orden público acompañó al Sr. Moosa hasta la oficina de gestión de la documentación, donde este contrató los servicios de dos abogados para que lo asistieran. El Sr. Moosa fue recluido en la comisaría de Al-Jamis y puesto en prisión preventiva en espera de juicio. Se permitió a la familia del Sr. Moosa que asistiera a las vistas del juicio, y este pudo llamarla y tener contacto con ella durante la primera vista. Además, se respetaron los derechos del Sr. Moosa a lo largo de la investigación y durante los procedimientos tanto en el Tribunal de Primera Instancia como en el Tribunal de Apelación. Lo examinó un médico forense, que confirmó que no había signos de tortura o agresión. El informe forense solo reveló lesiones leves en la mano del Sr. Moosa, como consecuencia de haber opuesto resistencia a los agentes de la autoridad, y no se encontró ninguna otra lesión.

28. Además, el Gobierno afirma que la Dependencia Especial de Investigación, adscrita a la Fiscalía, no recibió ninguna denuncia presentada en nombre del Sr. Moosa. Según el Gobierno, el Sr. Moosa fue una de las víctimas de un incidente en el que participaron varios reclusos del centro de reforma y rehabilitación en el que estaba recluido. Los prisioneros afirmaron que fueron golpeados por las fuerzas de seguridad cuando estas trataron de

controlar un motín en el centro en 2015. Tras realizar una investigación sobre este incidente, la Dependencia Especial de Investigación puso a disposición del tribunal penal a 13 personas que pertenecían a las Fuerzas de la Seguridad Pública y 10 de ellas fueron condenadas.

29. En relación con los presunto malos tratos infligidos al Sr. Moosa, el Gobierno subraya que el Ministerio del Interior procura ofrecer un entorno saludable y apropiado para todos los reclusos que se encuentran en los centros de reforma y rehabilitación. El médico que trabaja en cada centro toma las medidas necesarias para garantizar la seguridad de todos los reclusos y detenidos, además de realizar cualquier otra tarea prevista por la Ley de Centros de Reforma y Rehabilitación (Ley núm. 18 de 2014). Nada más internar a un recluso en un centro, se realiza un examen médico completo a fin de diagnosticar cualquier posible problema de salud, que se trata con la medicación necesaria y se controla periódicamente. Las comidas se preparan teniendo en cuenta los problemas de salud crónicos, como diabetes, colesterolemia, hipertensión o cardiopatías. Se conciertan las citas médicas necesarias para velar por la salud de cada recluso.

30. El Gobierno añade que el Ministerio del Interior otorga particular importancia a proporcionar servicios de atención de la salud mental a los reclusos. Todos los reclusos reciben el tratamiento y la medicación que necesitan y son controlados con regularidad y de conformidad con las normas internacionales. Se realizan exámenes periódicos en el Departamento de Salud del Ministerio del Interior o en cualquier otro hospital público dependiente del Ministerio de Salud y las Fuerzas de Defensa de Bahrein.

31. Según el Gobierno, sus registros indican que el Sr. Moosa ha acudido a 260 citas médicas desde que fue recluido por primera vez en un centro de reforma y rehabilitación y que se le ha proporcionado el tratamiento adecuado. Se sometió a 25 exámenes médicos entre el 15 de febrero y el 17 de julio de 2019. Además, de acuerdo con el informe médico del Sr. Moosa del 22 de julio de 2019, sus constantes vitales son normales y ha sido trasladado para recibir fisioterapia. El Sr. Moosa también ha recibido atención odontológica, y su última cita fue el 19 de junio de 2019. Se le permitió recibir algunos medicamentos de su familia, de acuerdo con las normas del centro. Se le hicieron pruebas analíticas el 25 de mayo de 2019 y exploraciones radiológicas de la espalda. Se concertó una cita en el consultorio de traumatología del Complejo Médico de Salmaniya. El Sr. Moosa tiene una cita programada con un oftalmólogo el 12 de diciembre de 2019 y otra con un traumatólogo el 20 de octubre de 2019. El Sr. Moosa ha podido solicitar a sus médicos cambios en la dieta.

32. El Gobierno niega todas las alegaciones de la fuente y señala que el Sr. Moosa fue condenado por la comisión de un acto delictivo tipificado en la legislación de Bahrein, por un sistema judicial independiente, que respetó todas las garantías durante la investigación, el juicio y la imposición de una condena. El Gobierno cree en el derecho a la dignidad. A este respecto, el Ministerio del Interior ha elaborado normas dirigidas a los empleados y los reclusos de los centros de reforma y rehabilitación, en las que se explican los derechos y obligaciones de cada persona. El Ministerio del Interior confirma su respeto por los derechos de los reclusos, así como el trato humano que tienen derecho a recibir de conformidad con las normas internacionales.

33. Por último, el Gobierno afirma que las denuncias relativas a casos de tortura o malos tratos infligidos a reclusos y personas en prisión preventiva son examinadas de manera independiente por el Defensor del Pueblo y la Dependencia Especial de Investigación. Estos organismos publican informes en los que se describen las medidas adoptadas para hacer frente a las violaciones, y toda persona cuya participación quede probada es inmediatamente puesta a disposición de los tribunales.

Comentarios adicionales de la fuente

34. La fuente reitera que el Sr. Moosa mantiene su inocencia en relación con los actos alegados por el Gobierno. Su condena se basó en una falsa confesión obtenida mediante tortura. Otros testimonios demostraron que se encontraba en otro lugar en el momento en que ocurrió el presunto delito. Además, la fuente señala que la respuesta del Gobierno no aborda las alegaciones de tortura y malos tratos cometidos durante la detención del

Sr. Moosa ni el hecho de que esta se produjera sin que mediara una orden judicial y sin informarlo de los motivos.

35. La fuente explica que se presentaron cargos contra el Sr. Moosa en virtud de los artículos 178 (participación en una manifestación ilegal), 357 (privación ilegal de libertad) y 358 (secuestro) del Código Penal y el artículo 2 (atentados terroristas contra la vida o la seguridad de otras personas) de la Ley de Protección de la Sociedad contra Actos Terroristas. Según la fuente, el artículo 1 de esa Ley define el terrorismo como cualquier acto que “atente contra la seguridad pública o ponga en peligro la seguridad del reino o perjudique la unidad nacional [...] [al causar daños] al medio ambiente, la salud pública, la economía nacional o los bienes, instituciones o instalaciones públicos [...] o impida u obstaculice el ejercicio de las funciones de las autoridades públicas, los lugares de culto o los centros de enseñanza”.

36. La fuente señala que en sus observaciones finales más recientes sobre Bahrein, en julio de 2018, el Comité de Derechos Humanos expresó su preocupación por el hecho de que esa Ley incluyera una definición excesivamente amplia de terrorismo que podría dar lugar a una interpretación en sentido lato y a vulneraciones del derecho a la libertad de expresión, de asociación y de reunión (CCPR/C/BHR/CO/1, párr. 29). El Comité también expresó su preocupación por los informes sobre la amplia utilización de la Ley contra los defensores de los derechos humanos y los activistas políticos (*ibid.*, párr. 29). La Comisión recomendó al Gobierno que modificara y reformara la Ley con miras a aclarar y delimitar los amplios conceptos mencionados a fin de asegurar que se ajusten a los principios de la seguridad y previsibilidad jurídicas y de que la aplicación de esa legislación no reprima las conductas y la libertad de expresión protegidas (*ibid.*, párr. 30).

37. La fuente cuestiona las conclusiones de los informes médicos forenses relativos al Sr. Moosa. La herida leve que presentaba el Sr. Moosa en la frente concuerda con sus alegaciones de que los agentes le propinaron patadas, bofetadas y golpes en la cara. Las demás pruebas físicas documentadas en el informe, incluidos los hematomas y la decoloración en las muñecas del Sr. Moosa, también concuerdan con las alegaciones de que los agentes lo inmovilizaron y lo colgaron por las muñecas y los pies al torturarlo. Además, muchos de los actos de tortura que describió el Sr. Moosa no habrían dejado una marca física, fundamentalmente porque la detención inicial y las primeras palizas denunciadas sucedieron más de un mes antes del examen. La fuente sostiene que el examen no cumplió las normas establecidas en el *Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes* (Protocolo de Estambul), que exige una descripción detallada de los abusos alegados por la víctima, incluido cualquier síntoma físico o psicológico que afirme padecer el sujeto, y una evaluación de su salud psicológica². El Protocolo de Estambul también dispone que en ningún caso se considerará que la ausencia de señales físicas indica que no se ha producido tortura³.

38. Además, la fuente afirma que, aunque el Sr. Moosa fue detenido el 16 de marzo de 2011, no pudo designar a sus abogados hasta el 5 de abril de 2011. Su familia también informa de que, durante ese período, acudieron a numerosas comisarías de policía en busca del Sr. Moosa, sin éxito. No se informó a la familia del Sr. Moosa de su paradero ni de cómo se encontraba hasta su primera comparecencia ante el tribunal, el 26 de abril de 2011. Aunque el Sr. Moosa había designado abogados, estos no pudieron reunirse con él durante ese período y tampoco sabían dónde estaba. En consecuencia, la fuente sostiene que el Sr. Moosa fue víctima de desaparición forzada del 16 de marzo al 26 de abril de 2011, dado que: a) fue privado de libertad contra su voluntad por funcionarios públicos; y b) las autoridades no revelaron información sobre su suerte o su paradero (A/HRC/16/48/Add.3 y Corr.1, párr. 21).

39. Según la fuente, el Sr. Moosa no pudo reunirse con su abogado hasta la primera vista, que tuvo lugar el 26 de abril de 2011. Además, fue interrogado sin la presencia de un abogado y no fue inmediatamente llevado ante una autoridad judicial para ser informado de

² Publicación de las Naciones Unidas, núm. de venta S.04.XIV.3, párrs. 83 b) a c) y 104.

³ *Ibid.*, párr. 161.

los cargos que se le imputaban. La fuente rebate la afirmación del Gobierno de que el Sr. Moosa fue condenado tras un juicio con todas las garantías judiciales.

40. La fuente reitera que la familia del Sr. Moosa presentó varias denuncias ante la Institución Nacional de Derechos Humanos y el Defensor del Pueblo, que están facultados ambos para remitir a la Dependencia Especial de Investigación los casos de conducta indebida de los funcionarios públicos. La familia del Sr. Moosa acudió a la Institución Nacional de Derechos Humanos al menos en tres ocasiones y al Defensor del Pueblo al menos en cinco ocasiones. Las denuncias se referían a la tortura y los malos tratos infligidos al Sr. Moosa y a la denegación de acceso a la atención médica.

41. Desde el 14 de julio de 2019, el Sr. Moosa padece dolor de espalda, micción frecuente y diarrea. Se puso en contacto con la Institución Nacional de Derechos Humanos 16 veces y llamó al Defensor del Pueblo en 4 ocasiones. El 22 de septiembre de 2019, el Sr. Moosa llamó a su familia con objeto de grabar un mensaje dirigido a la Dependencia Especial de Investigación, en el que afirmaba que recientemente había presentado una queja y el personal penitenciario había cursado una queja en represalia contra él. En esta grabación, también reiteró sus reclamaciones sobre las condiciones de reclusión, como, por ejemplo, el hecho de que no se le permitiera llamar a sus familiares, que estuviera constantemente esposado y que lo mantuvieran confinado en una celda con cañerías viejas, lo que atraía a roedores y plagas.

42. La fuente señala que la respuesta del Gobierno indica que se ha llevado al Sr. Moosa a 260 citas médicas durante su encarcelamiento. Sin embargo, el Sr. Moosa y su familia sostienen que no ha recibido una atención médica adecuada, ya que a veces acude a citas médicas, pero no recibe tratamiento alguno. A menudo, el personal sanitario se limita a suministrarle analgésicos y vitaminas, en vez de un tratamiento o una atención especializados para dar solución a sus problemas de salud subyacentes. El Sr. Moosa no ha recibido atención odontológica apropiada para la rotura de las piezas dentales y el maxilar ni se le ha ofrecido una dieta blanda que se ajuste a las recomendaciones médicas. Por último, la fuente informa de que recientemente se le proporcionó al Sr. Moosa una cama especial debido a su dolor de espalda, pero que enseguida se la retiraron, a pesar de que seguía necesiéndola.

Deliberaciones

43. El Grupo de Trabajo agradece a la fuente y al Gobierno la información suministrada.

44. Para determinar si la privación de libertad del Sr. Moosa es arbitraria, el Grupo de Trabajo tiene en cuenta los principios establecidos en su jurisprudencia acerca de su manera de proceder en relación con las cuestiones probatorias. Si la fuente ha presentado indicios razonables de una vulneración de los requisitos internacionales constitutiva de detención arbitraria, debe entenderse que la carga de la prueba recae en el Gobierno en caso de que desee refutar las alegaciones. La mera afirmación de que se han seguido los procedimientos legales no basta para refutar las presunciones de la fuente (A/HRC/19/57, párr. 68).

45. La fuente alega que el Sr. Moosa fue detenido el 16 de marzo de 2011 sin que mediara una orden judicial y sin ser informado de los motivos. El Gobierno no dio respuesta a esas alegaciones. A falta de impugnación por parte del Gobierno, el Grupo de Trabajo considera que la información aportada por la fuente es creíble. El Grupo de Trabajo ha constatado en casos recientes relativos a Bahrein que no se presentó una orden de detención ni se comunicaron las razones de la misma, lo que sugiere que el incumplimiento de los procedimientos de detención es un problema sistémico⁴.

46. Con arreglo al artículo 9, párrafo 1, del Pacto, nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en esta. El artículo 9, párrafo 2, del Pacto dispone que toda persona detenida será informada, en el momento de su detención, de las razones de la misma. El Sr. Moosa fue detenido sin que mediara orden judicial, en contravención del artículo 9, párrafo 1, del Pacto. Como ha afirmado el Grupo de Trabajo, para que la privación de libertad tenga fundamento jurídico

⁴ Véanse, por ejemplo, las opiniones núms. 31/2019, 79/2018, 51/2018, 55/2016 y 41/2015.

no basta con que exista una ley que autorice la detención. Las autoridades deben invocar ese fundamento jurídico y aplicarlo a las circunstancias del caso mediante una orden de detención⁵. Además, tampoco se informó al Sr. Moosa de las razones de su detención, en violación del artículo 9, párrafo 2, del Pacto. El Grupo de Trabajo considera que una detención es arbitraria cuando se realiza sin informar a la persona detenida de las razones de la misma⁶.

47. La fuente alega además que, entre el momento de la detención, el 16 de marzo de 2011, y la primera vista del juicio, el 26 de abril de 2011, en ningún momento se llevó al Sr. Moosa ante un juez para impugnar la legalidad de su detención. El Gobierno no ha dado respuesta a esta alegación y su relato de los hechos parece respaldar la cronología proporcionada por la fuente en cuanto a la fecha en que se produjo la detención del Sr. Moosa y su primera comparecencia ante el tribunal. Según el Gobierno, fue la fiscalía la que ordenó la detención del Sr. Moosa durante 60 días a partir del 26 de marzo de 2011, en lugar de una autoridad judicial⁷.

48. Conforme al artículo 9, párrafo 3, del Pacto, toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal será llevada sin demora ante un juez. Como ha declarado el Comité de Derechos Humanos, un plazo de 48 horas es normalmente suficiente para cumplir el requisito de llevar a la persona detenida “sin demora” ante un juez después de su detención, y todo plazo superior deberá obedecer a circunstancias excepcionales y estar justificado por ellas⁸. A falta de esa justificación, el Grupo de Trabajo considera que el Gobierno violó el artículo 9, párrafo 3, del Pacto al no llevar al Sr. Moosa ante un juez hasta 40 días después de su detención.

49. Además, la fuente alega que el Sr. Moosa fue objeto de desaparición forzada desde el momento de su detención, el 16 de marzo de 2011, hasta la primera vista del juicio, el 26 de abril de 2011. Según la fuente, durante ese período los familiares del Sr. Moosa acudieron a varias comisarías de policía en su busca, pero no lo localizaron. Ni sus familiares ni sus abogados conocían su paradero y no pudieron reunirse con él hasta su primera comparecencia ante el tribunal, el 26 de abril de 2011. En su respuesta, el Gobierno afirma que no hay pruebas de que la policía sometiera al Sr. Moosa a desaparición forzada durante el estado de emergencia. De acuerdo con el Gobierno, un funcionario del orden público acompañó al Sr. Moosa hasta la oficina de gestión de la documentación, donde este contrató los servicios de dos abogados para que lo asistieran. Se permitió a la familia del Sr. Moosa asistir a las vistas del juicio, y este pudo llamar a su familia y tener contacto con ella durante la primera vista.

50. El Grupo de Trabajo observa que las comunicaciones del Gobierno parecen respaldar la versión de los hechos de la fuente, según la cual la familia del Sr. Moosa no tuvo contacto con él hasta su primera comparecencia ante el tribunal. El Gobierno no proporcionó ninguna información o prueba que demostrara que la familia del Sr. Moosa pudo tener contacto con él en un momento anterior de su reclusión. Además, el Gobierno afirma que el Sr. Moosa pudo contratar a dos abogados, pero no indica cuándo ocurrió⁹ ni aporta ninguna prueba pertinente de que el Sr. Moosa hubiera contratado a ningún abogado cuando fue llevado a la oficina de gestión de la documentación. En consecuencia, el Grupo de Trabajo considera que la alegación de la fuente de que el Sr. Moosa fue víctima de

⁵ Véanse, por ejemplo, las opiniones núms. 46/2019, 33/2019, 9/2019, 46/2018, 36/2018, 10/2018 y 38/2013.

⁶ Véase, por ejemplo, la opinión núm. 10/2015, párr. 34. Véase también la opinión núm. 46/2019, párr. 51.

⁷ Los fiscales militares no son competentes para examinar la legalidad de la detención de civiles, ya que no cumplen los requisitos de independencia e imparcialidad. Véanse los Principios y Directrices Básicos de las Naciones Unidas sobre los Recursos y Procedimientos relacionados con el Derecho de Toda Persona Privada de Libertad a Recurrir ante un Tribunal (A/HRC/30/37, anexo), párr. 55.

⁸ Comité de Derechos Humanos, observación general núm. 35 (2014), relativa a la libertad y la seguridad personales, párr. 33.

⁹ Según la fuente, el Sr. Moosa no pudo designar a sus abogados hasta el 5 de abril de 2011, aunque no pudieron reunirse con él hasta su primera comparecencia ante el tribunal, el 26 de abril de 2011.

desaparición forzada es creíble y ha decidido remitir este caso al Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias (A/HRC/16/48/Add.3 y Corr.1, párr. 21)¹⁰.

51. Como ha sostenido sistemáticamente el Grupo de Trabajo, la reclusión de personas en unas condiciones tales que no tengan acceso al mundo exterior, y en particular a sus familiares y abogados, vulnera su derecho a impugnar la legalidad de la detención ante un tribunal, reconocido en el artículo 9, párrafo 4, del Pacto¹¹. La supervisión judicial de la privación de libertad es una salvaguardia fundamental de la libertad personal¹² y resulta esencial para garantizar que la reclusión tenga fundamento jurídico. Dado que el Sr. Moosa no pudo impugnar su detención durante los 40 días transcurridos entre su detención y la primera vista del juicio, mientras era víctima de desaparición forzada, se vulneró su derecho a un recurso efectivo, consagrado en el artículo 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 2, párrafo 3, del Pacto.

52. El Grupo de Trabajo concluye que el Gobierno no estableció un fundamento jurídico para la detención y reclusión del Sr. Moosa. Su privación de libertad es arbitraria y se inscribe en la categoría I.

53. La fuente alega que el Sr. Moosa fue detenido por ejercer pacíficamente sus derechos a la libertad de pensamiento, de expresión, de reunión y de asociación, reconocidos en los artículos 18, 19 y 20 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los artículos 18, 19, 21 y 22 del Pacto. Según la fuente, el Sr. Moosa ha sido perseguido por haber participado en manifestaciones en favor de la democracia, en las que se pedía un gobierno más democrático y un mayor respeto de los derechos humanos en Bahrein, durante la Primavera Árabe, en febrero de 2011.

54. En su respuesta, el Gobierno presenta una versión de los hechos completamente diferente, alegando que el Sr. Moosa formaba parte de un grupo de personas que asaltaron y secuestraron a un agente de policía, haciendo uso de la violencia, el 14 de marzo de 2011. Es decir, el procedimiento incoado contra el Sr. Moosa no fue resultado del ejercicio de sus derechos y libertades garantizados por el derecho internacional de los derechos humanos, sino que fue condenado por la comisión de un acto delictivo tipificado en la legislación de Bahrein. El Sr. Moosa fue condenado a 20 años de prisión, pena que posteriormente se redujo a 10 años en apelación¹³, tras el enjuiciamiento por secuestro y agresión a un agente de policía, participación en una reunión ilegal y privación ilegal de libertad, en virtud de los artículos 107, 178, 357 y 358 del Código Penal y los artículos 1 a 3 de la Ley de Protección de la Sociedad contra Actos Terroristas.

55. El Grupo de Trabajo se ha encontrado con que la fuente y el Gobierno presentan dos versiones diferentes de los hechos y ha evaluado cuidadosamente la información disponible. La fuente afirma que el Sr. Moosa no tenía conexión alguna con los otros coacusados y que no los conocía personalmente. Además, la fuente alega que cinco testigos declararon que el Sr. Moosa se encontraba en otro lugar en el momento del intento de secuestro. El Gobierno no dio respuesta a esas alegaciones ni proporcionó información alguna que reforzase la credibilidad de sus afirmaciones. En consecuencia, el Grupo de Trabajo considera que los argumentos de la fuente son creíbles. Para llegar a esta conclusión, el Grupo de Trabajo ha observado que, de los nueve encausados, solo el Sr. Moosa fue condenado. Los otros ocho coacusados fueron absueltos en apelación, lo que sugiere que había una razón particular para perseguir al Sr. Moosa.

56. Además, la cronología de la detención y reclusión del Sr. Moosa demuestra que fue detenido el 16 de marzo de 2011, poco después de, según afirma, haber participado en las protestas de febrero de 2011, lo que indica que podría haber habido una conexión entre el ejercicio de sus derechos y la detención. En su jurisprudencia, el Grupo de Trabajo ha

¹⁰ Véase también CCPR/C/BHR/CO/1, párrs. 35 y 36, donde el Comité de Derechos Humanos expresó su preocupación por las denuncias de desaparición forzada, tortura y detención arbitraria.

¹¹ Véanse, por ejemplo, las opiniones núms. 45/2019, 33/2019, 32/2019, 46/2017 y 45/2017, en las que el Grupo de Trabajo consideró que se había violado el artículo 9, párrafo 4, del Pacto al mantener a los detenidos en régimen de incomunicación.

¹² Principios y Directrices Básicos de las Naciones Unidas, párr. 3.

¹³ El Gobierno afirma que la pena del Sr. Moosa se redujo en apelación a 15 años de prisión.

observado el vínculo entre la participación de determinadas personas en las protestas de 2011 y su posterior detención, y considera que este caso forma parte de ese patrón de actuación.¹⁴ En consecuencia, el Grupo de Trabajo considera que el Sr. Moosa fue detenido por el ejercicio pacífico de sus derechos humanos.

57. El Grupo de Trabajo recuerda que el artículo 19, párrafo 2, del Pacto dispone que “toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”. Este derecho incluye el discurso político, los comentarios sobre los asuntos públicos y el debate sobre derechos humanos¹⁵. Protege el derecho a tener y expresar opiniones, incluidas aquellas que son críticas con la política gubernamental o no se ajustan a ella¹⁶. Por estos motivos, el Grupo de Trabajo considera que la participación pacífica del Sr. Moosa en las manifestaciones de febrero de 2011 se inscribe claramente dentro de los límites de la libertad de opinión y de expresión, protegida por el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 19 del Pacto.

58. Asimismo, el Grupo de Trabajo considera que, al participar en protestas pacíficas en favor de la democracia, el Sr. Moosa estaba ejerciendo su derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos¹⁷. También estaba ejerciendo pacíficamente su derecho a la libertad de reunión y de asociación con otros grupos y personas afines de Bahrein que participaban en las protestas y que, según la fuente, se contaban por miles. El Grupo de Trabajo considera que el Sr. Moosa fue detenido por ejercer los derechos que lo asisten en virtud de los artículos 20 y 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los artículos 21, 22 y 25 a) del Pacto.

59. Además, no hay nada que indique que las restricciones permisibles de los derechos ejercidos por el Sr. Moosa, enunciadas en los artículos 19, párrafo 3, 21, 22, párrafo 2, y 25 del Pacto, sean aplicables en el presente caso. El Gobierno no explicó de qué manera el enjuiciamiento del Sr. Moosa era necesario para proteger un interés legítimo en virtud de esas disposiciones ni en qué sentido la condena y la pena de diez años de prisión impuesta al Sr. Moosa constituían una respuesta proporcional a sus actividades. En cualquier caso, el Consejo de Derechos Humanos ha exhortado a los Estados a que se abstengan de imponer restricciones en virtud del artículo 19, párrafo 3, que no sean compatibles con el derecho internacional de los derechos humanos¹⁸. El Grupo de Trabajo remite el presente caso al Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión y al Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación.

60. El Grupo de Trabajo observa que el Sr. Moosa fue acusado en virtud de la Ley de Protección de la Sociedad contra Actos Terroristas, una Ley que, según el Comité de Derechos Humanos, incluye una definición demasiado amplia de terrorismo, que puede dar lugar a vulneraciones del derecho a la libertad de expresión, de asociación y de reunión (CCPR/C/BHR/CO/1, párr. 29). Como el Grupo de Trabajo ha afirmado en ocasiones

¹⁴ Véanse las opiniones núms. 79/2018 (párrs. 98 y 99); 51/2018, párr. 87; 35/2016, párr. 7; 22/2014, párr. 17; y 6/2012, párr. 43. Véase también CCPR/C/BHR/CO/1, párrs. 35 y 36, donde el Comité de Derechos Humanos expresó su preocupación por las denuncias de detenciones arbitrarias de civiles que participaron en manifestaciones pacíficas en favor del cambio político y democrático en 2011.

¹⁵ Comité de Derechos Humanos, observación general núm. 34 (2011), relativa a la libertad de opinión y libertad de expresión, párr. 11.

¹⁶ Por ejemplo, opiniones núms. 8/2019, párr. 55, y 79/2017, párr. 55.

¹⁷ Según el Comité de Derechos Humanos, los ciudadanos pueden participar en la dirección de los asuntos públicos ejerciendo influencia mediante el debate público (observación general núm. 25 (1996), relativa a la participación en los asuntos públicos y el derecho de voto, párr. 8). Véanse también las opiniones núms. 45/2019, 9/2019, 46/2018, 45/2018, 36/2018, 35/2018, 40/2016 y 26/2013.

¹⁸ Véase la resolución del Consejo de Derechos Humanos 12/16, párr. 5 p), en la que el Consejo exhorta a los Estados a que se abstengan de imponer restricciones que no sean compatibles con el artículo 19, párrafo 3, incluidas aquellas relativas a la discusión de políticas del Gobierno y el debate político; la información sobre los derechos humanos, las actividades del Gobierno y la corrupción en el Gobierno; y la participación en manifestaciones pacíficas o actividades políticas.

anteriores, el principio de legalidad exige que las leyes se formulen con precisión suficiente para resultar accesibles y comprensibles para el ciudadano, de modo que este pueda modificar su conducta en consecuencia¹⁹. En el presente caso, la aplicación de disposiciones vagas y excesivamente amplias respalda la conclusión del Grupo de Trabajo de que la privación de libertad del Sr. Moosa se inscribe en la categoría II. Además, el Grupo de Trabajo considera que, en algunas circunstancias, las leyes pueden ser tan vagas y excesivamente amplias que resulta imposible invocar un fundamento jurídico que justifique la privación de libertad.

61. Por estos motivos, el Grupo de Trabajo concluye que la privación de libertad del Sr. Moosa es arbitraria y se inscribe en la categoría II.

62. Habida cuenta de su conclusión de que la privación de libertad del Sr. Moosa es arbitraria y se inscribe en la categoría II, el Grupo de Trabajo subraya que el Sr. Moosa no debería haber sido sometido a juicio. Sin embargo, fue declarado culpable y condenado el 19 de mayo de 2011, aunque posteriormente se presentó un recurso, de resultados del cual se redujo su pena.

63. El Grupo de Trabajo considera que la información presentada por la fuente pone de relieve que se incurrió en varias vulneraciones del derecho del Sr. Moosa a un juicio imparcial, que se analizan más adelante. El Gobierno no respondió de manera específica a varias de las alegaciones de la fuente²⁰ y se limitó a señalar que el Sr. Moosa fue condenado por la comisión de un acto delictivo con arreglo a la legislación de Bahrein por un sistema judicial independiente, que respetó todas las garantías durante la investigación, el juicio y la imposición de una condena. El Gobierno también hizo una declaración general en la que negaba todas las alegaciones de la fuente.

64. En primer lugar, como ya se ha señalado, el Sr. Moosa fue víctima de desaparición forzada desde el momento de su detención, el 16 de marzo de 2011, hasta su primera comparecencia ante el tribunal, el 26 de abril de 2011. En consecuencia, el Sr. Moosa no pudo impugnar su detención, dado que había quedado sustraído a la protección de la ley. El Grupo de Trabajo considera que de este modo se vulneró el derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica, consagrado en el artículo 6 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 16 del Pacto. La desaparición forzada del Sr. Moosa constituye también una violación de su derecho a comunicarse con el mundo exterior, reconocido en los principios 15, 16, párrafo 1, y 19 del Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión y la regla 58 de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (las Reglas Nelson Mandela).

65. Además, la fuente alega que el Sr. Moosa fue sometido a actos de tortura y malos tratos tanto físicos como psicológicos, como intimidar al detenido, introducirlo en el maletero de un automóvil, vendarle los ojos, privarlo de sueño, negarle el acceso a las duchas y los aseos, obligarlo a permanecer de pie, obligarlo a permanecer desnudo y someterlo a agresiones sexuales, confinarlo en una habitación fría, inmovilizarlo y colgarlo de manos y pies durante muchas horas, propinarle golpes, patadas y bofetadas, y escupirle en la cara. Sostiene que se humilló al Sr. Moosa obligándolo a imitar sonidos de animales y a cantar el himno nacional de Bahrein. Las autoridades también amenazaron con torturar a los familiares del Sr. Moosa. Según la fuente, el Sr. Moosa no ha recibido la atención médica adecuada para tratar los problemas de salud derivados del trato recibido.

66. En su respuesta, el Gobierno afirma que el Sr. Moosa fue examinado por un médico forense, que confirmó que no había señales de tortura ni agresión. Según el Gobierno, el informe forense únicamente puso de manifiesto que el Sr. Moosa presentaba heridas leves en la mano como consecuencia de su resistencia a los agentes del orden, una herida superficial en la frente causada por contacto con una superficie sólida y áspera y una decoloración alrededor de las muñecas por haber sido esposado. Sin embargo, el Gobierno

¹⁹ Véase, por ejemplo, la opinión núm. 41/2017, párrs. 98 a 101.

²⁰ En los casos en que el Gobierno formuló observaciones sobre las alegaciones de la fuente, esto se señala en el análisis.

no proporcionó ningún informe pertinente ni otras pruebas que respaldaran esas afirmaciones.

67. Como señala la fuente, las lesiones descritas por el Gobierno concuerdan con las alegaciones del Sr. Moosa de que le propinaron patadas, bofetadas y golpes en la cara y que lo colgaron de las muñecas y los pies al torturarlo. Además, el Grupo de Trabajo está de acuerdo con el argumento aducido por la fuente de que muchos de los actos de tortura que describió el Sr. Moosa no habrían dejado una marca física²¹, fundamentalmente porque la detención inicial y las primeras palizas denunciadas sucedieron más de un mes antes del examen. La fuente alega que el examen del Sr. Moosa tampoco cumplió los requisitos del Protocolo de Estambul, que exige una descripción detallada de los abusos alegados por la víctima y una evaluación de su salud psicológica²².

68. El Grupo de Trabajo considera que la fuente ha ofrecido indicios razonables de que el Sr. Moosa fue víctima de actos de tortura física y psicológica²³. Este modo de proceder parece infringir la prohibición absoluta de la tortura como norma imperativa del derecho internacional, en virtud del artículo 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 7 del Pacto y los artículos 2 y 16 de la Convención contra la Tortura. De hecho, el Grupo de Trabajo considera que la tortura y los malos tratos descritos por la fuente en el presente caso son de un nivel tal que remueven la conciencia. Según la fuente, el Sr. Moosa fue sometido a tortura y malos tratos en al menos ocho ocasiones distintas²⁴, en diversos lugares y con la participación de varios agentes y guardias y de un fiscal militar. Las alegaciones dan a entender que una serie de actores en el conjunto del sistema judicial participan activamente o son cómplices de tortura y otras formas de malos tratos contra las personas que están bajo su custodia. La fuente informa de que se han presentado varias denuncias ante la Institución Nacional de Derechos Humanos, la Comisión de Derechos de Presos y Detenidos, el Defensor del Pueblo, la Dirección de Tribunales Militares y las autoridades penitenciarias, sin resultado alguno.

69. Dada la gravedad de los presuntos actos de tortura infligidos, al Grupo de Trabajo se le antoja sumamente improbable que el Sr. Moosa hubiera podido contribuir de manera efectiva a su defensa y participar en ella, tanto en el primer juicio como en los procedimientos de apelación posteriores, lo que respalda la conclusión de que las presuntas torturas vulneraron su derecho a un juicio con las debidas garantías²⁵.

70. Además, la fuente alega que el Sr. Moosa hizo una confesión como resultado de la tortura. Según la fuente, el Sr. Moosa fue torturado en la Fiscalía y en los pasillos de los tribunales, donde el fiscal militar de las Fuerzas de Defensa de Bahrein lo coaccionó para que firmara declaraciones. Cuando el Sr. Moosa solicitó leer esos documentos, lo amenazaron con emplear armas contra él. La fuente afirma que la condena del Sr. Moosa se basó en esa falsa confesión, obtenida mediante tortura. El Gobierno no dio respuesta a esa alegación. El Grupo de Trabajo considera que la admisión como prueba de una declaración

²¹ El Grupo de Trabajo llegó a una conclusión similar en su opinión núm. 53/2018, párr. 76. Véase también el Protocolo de Estambul, párr. 161.

²² Protocolo de Estambul, párrs. 83 b) y c) y 104.

²³ Véase CAT/C/BHR/CO/2-3, párr. 8, donde el Comité contra la Tortura expresó su preocupación por las denuncias constantes de torturas y malos tratos a personas privadas de libertad en todos los lugares de detención, en el momento de la detención, durante la prisión preventiva y en las cárceles, a fin de obtener confesiones o como castigo. Véase también CCPR/C/BHR/CO/1, párr. 37, donde el Comité de Derechos Humanos expresó su preocupación por las denuncias de tortura en la prisión de Jau.

²⁴ Estas ocho ocasiones fueron: a) durante su detención; b) en la comisaría de policía de Al-Jamis; c) en la comisaría de policía de Ciudad Hamad; d) en la comisaría de policía de Al-Noaim y luego en la de Al-Qudaibiya; e) en el Centro de Detención Dry Dock; f) en la Prisión Militar de Al-Qurain; g) en la prisión de Jau; y h) en la Fiscalía y en los pasillos de los tribunales.

²⁵ En la opinión núm. 29/2017, párr. 63, el Grupo de Trabajo afirmó que, si bien su mandato no abarca las condiciones de detención ni el trato de los reclusos, debe examinar en qué medida las condiciones de privación de libertad pueden afectar negativamente a la capacidad de los reclusos para preparar su defensa y a sus posibilidades de tener un juicio imparcial. Véanse las opiniones núms. 53/2018, párr. 77 c); 52/2018, párr. 79 j); y 47/2017, párr. 28; y E/CN.4/2004/3/Add.3, párr. 33. Véase también la opinión núm. 32/2019.

presuntamente obtenida mediante tortura invalida la imparcialidad de todo el proceso²⁶. Corresponde al Gobierno demostrar que la declaración del Sr. Moosa se hizo libremente, pero no lo ha hecho²⁷. Como se analiza más adelante, el Sr. Moosa no tuvo acceso a sus abogados antes del juicio. El Grupo de Trabajo considera que las confesiones hechas en ausencia de un abogado no son admisibles como prueba en un proceso penal²⁸.

71. Así pues, se vulneraron los derechos del Sr. Moosa a la presunción de inocencia, consagrado en el artículo 14, párrafo 2, del Pacto, y a no ser obligado a confesarse culpable, reconocido en el artículo 14, párrafo 3 g), del Pacto. La imposición deliberada de presión física o psicológica con el fin de obtener una confesión también supuso una conculcación de las obligaciones de Bahrein en virtud de los artículos 2, 13, 15 y 16 de la Convención contra la Tortura²⁹.

72. Dada la gravedad de las alegaciones de tortura, el Grupo de Trabajo ha decidido remitir el caso al Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

73. La fuente sostiene que el juicio del Sr. Moosa ante el Tribunal de Seguridad Nacional vulneró su derecho a un juicio con las debidas garantías. Según la fuente, los Tribunales de Seguridad Nacional estuvieron en funcionamiento durante el estado de emergencia que siguió a las protestas, estaban integrados por un juez militar presidente y dos jueces civiles, y en ellos ejercían la acusación también miembros del ejército. Esos tribunales se disolvieron a raíz de que la Comisión Independiente de Investigación de Bahrein concluyera que no respetaban los principios de un juicio con las debidas garantías. El Gobierno no dado respuesta a esta alegación.

74. El Grupo de Trabajo considera que los tribunales militares solo pueden ser competentes para juzgar al personal militar por delitos de índole militar y que en ninguna circunstancia deben juzgar a civiles, independientemente de los cargos imputados. Como ha sostenido sistemáticamente el Grupo de Trabajo en su jurisprudencia, un tribunal compuesto por militares no puede considerarse un tribunal competente, independiente e imparcial, como exigen las normas del derecho internacional de los derechos humanos (A/HRC/27/48, párrs. 66 a 71, 85 y 86)³⁰. En consecuencia, el juicio del Sr. Moosa ante el Tribunal de Seguridad Nacional, un tribunal militar³¹, vulneró su derecho a ser oído con las debidas garantías por un tribunal independiente e imparcial, consagrado en el artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 14, párrafo 1, del Pacto.

75. Además, la fuente alega que el juez de primera instancia no tuvo en cuenta el testimonio de descargo de cinco testigos que declararon que el Sr. Moosa se encontraba en otro lugar en el momento del intento de secuestro. El Gobierno no dio respuesta a esa alegación. A falta de una justificación del Gobierno sobre el motivo por el que el juez no tuvo en cuenta pruebas de descargo pertinentes, el Grupo de Trabajo considera que el modo de proceder del juez de primera instancia no cumplió el criterio de un tribunal independiente e imparcial con arreglo al artículo 14, párrafo 1, del Pacto. Ese modo de proceder también constituye una vulneración del párrafo 6 de los Principios Básicos relativos a la Independencia de la Judicatura, que establece que el principio de independencia de la judicatura autoriza y obliga a la judicatura a garantizar que el procedimiento judicial se desarrolle conforme a derecho, así como el respeto de los

²⁶ Véanse las opiniones núms. 52/2018, párr. 79 i); 34/2015, párr. 28; y 43/2012, párr. 51.

²⁷ Comité de Derechos Humanos, observación general núm. 32 (2007), relativa al derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia, párr. 41.

²⁸ Véanse, por ejemplo, las opiniones núms. 14/2019, párr. 71; 1/2014, párr. 22; y 40/2012, párr. 48. Véase también E/CN.4/2003/68, párr. 26 e).

²⁹ Véase CAT/C/BHR/CO/2-3, párr. 16, donde el Comité contra la Tortura expresó su preocupación por las numerosas denuncias del uso continuo y generalizado de confesiones obtenidas por la fuerza, lo que constituye una violación del artículo 15 de la Convención contra la Tortura.

³⁰ Véanse, por ejemplo, las opiniones núms. 46/2019, párr. 66; 4/2019, párr. 58; 73/2018, párr. 61; 3/2018, párr. 57; 56/2017, párr. 58; 51/2017, párr. 43; 51/2016, párr. 26; 44/2016, párr. 32; 15/2016, párr. 25; y 6/2012, párr. 45.

³¹ Opinión núm. 6/2012, párr. 45.

derechos de las partes. El Grupo de Trabajo ha decidido remitir el presente caso al Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados.

76. Además, la fuente alega que el Sr. Moosa no pudo reunirse con sus abogados hasta la primera vista del juicio, celebrada el 26 de abril de 2011. Por lo tanto, fue interrogado sin abogado y no dispuso de tiempo suficiente para prepararse para el juicio. Como se ha señalado anteriormente, el Gobierno declaró que el Sr. Moosa fue acompañado hasta la oficina de gestión de la documentación, donde contrató a sus abogados, pero no indicó cuándo ocurrió esto. El Grupo de Trabajo recuerda que todas las personas privadas de libertad tienen derecho a la asistencia letrada de un abogado de su elección en cualquier momento de su reclusión, incluso inmediatamente después de su detención, y que ese acceso se debe facilitar sin demora³². En el presente caso, no se respetó el derecho del Sr. Moosa a disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa y a comunicarse con un defensor de su elección, reconocido en el artículo 14, párrafo 3 b), del Pacto, ni el derecho a defenderse de manera efectiva recurriendo a un defensor de su elección en virtud del artículo 14, párrafo 3 d), del Pacto.

77. El Grupo de Trabajo concluye que las vulneraciones del derecho a un juicio imparcial son de gravedad tal que confieren a la privación de libertad del Sr. Moosa carácter arbitrario conforme a la categoría III.

78. Por último, la fuente alega que la privación de libertad del Sr. Moosa es discriminatoria porque se basó en su opinión política o de otra índole, expresada a través de su participación en las protestas en favor de la democracia en febrero de 2011.

79. El Grupo de Trabajo ya ha establecido, en el análisis expuesto anteriormente en relación con la categoría II, que la detención y reclusión del Sr. Moosa fueron resultado del ejercicio pacífico de los derechos que lo asisten en virtud del derecho internacional. Cuando se establece que una privación de libertad se debe al ejercicio activo de derechos civiles y políticos, existen sólidas razones para suponer que esta constituye además una vulneración del derecho internacional por tratarse de discriminación por motivos de opinión política o de otra índole³³.

80. De la información recibida se desprende que las opiniones políticas del Sr. Moosa son de vital importancia en el presente caso y que la actitud que las autoridades han mantenido con respecto a él solo puede calificarse de discriminatoria. En efecto, el Sr. Moosa ha sido torturado y sometido a malos tratos en repetidas ocasiones durante su detención. Fue el único acusado de un grupo de nueve personas que resultó condenado, ya que los otros ocho coacusados fueron todos absueltos del intento de secuestro. El Grupo de Trabajo considera que la única explicación plausible de este trato es que las autoridades persiguieron al Sr. Moosa porque había participado en las protestas.

81. Por esas razones, el Grupo de Trabajo considera que el Sr. Moosa fue privado de libertad por motivos discriminatorios, esto es, sobre la base de su opinión política o de otra índole. Su privación de libertad viola los artículos 2 y 7 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los artículos 2, párrafo 1, y 26 del Pacto, es arbitraria y se inscribe en la categoría V.

82. El Grupo de Trabajo desea expresar su profunda preocupación por la salud física y psicológica del Sr. Moosa. Según la fuente, su salud se ha deteriorado desde su detención. Padece una serie de dolencias, entre las que se cuentan dolor de espalda, discopatía degenerativa, rotura de piezas dentales y lesiones en el lado derecho del maxilar inferior. La fuente alega que todas estas lesiones fueron resultado de la tortura y la posterior falta de atención médica, ya que el Sr. Moosa no ha recibido los cuidados médicos ni el tratamiento que necesita. En su respuesta, el Gobierno examina detenidamente el nivel de la atención sanitaria que se proporciona a los detenidos en Bahrein y detalla numerosos ejemplos de la atención prestada al Sr. Moosa, pero no proporciona más información, como, por ejemplo, historiales médicos. El Grupo de Trabajo considera que el trato dispensado al Sr. Moosa no se ajusta a las normas establecidas en las reglas 1, 24, 27, 31 y 42 de las Reglas Nelson

³² Principios y Directrices Básicos de las Naciones Unidas, párrs. 12 y 67.

³³ Véanse las opiniones núms. 13/2018, párr. 34, y 88/2017, párr. 43.

Mandela, entre otras disposiciones. Dado que el Sr. Moosa lleva privado de libertad más de ocho años, el Grupo de Trabajo insta al Gobierno a que lo ponga en libertad de manera inmediata e incondicional, y a que vele por que reciba la atención médica necesaria. Dado que los numerosos intentos del Sr. Moosa y sus familiares de denunciar la denegación del acceso a la atención sanitaria no han dado frutos, el Grupo de Trabajo remitirá este caso al Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental.

83. Este es uno de los diversos casos presentados ante el Grupo de Trabajo en los últimos años en relación con la privación arbitraria de libertad en Bahrein³⁴. El Grupo de Trabajo observa que muchos de esos casos relativos a Bahrein siguen una pauta similar de detención y reclusión que no se ajusta a las normas internacionales; prisión preventiva con acceso limitado a la revisión judicial; denegación de acceso a la asistencia letrada; confesión forzada; reclusión en régimen de incomunicación y de aislamiento, y desaparición forzada; enjuiciamiento, invocando delitos tipificados de forma imprecisa, por el ejercicio pacífico de los derechos humanos; juicios ante tribunales militares que carecen de independencia; torturas y malos tratos; y denegación de atención médica. El Grupo de Trabajo recuerda que, en determinadas circunstancias, el encarcelamiento generalizado o sistemático, u otras privaciones graves de libertad, en violación de las normas del derecho internacional, pueden constituir crímenes de lesa humanidad³⁵.

84. El Grupo de Trabajo acogería con satisfacción la oportunidad de trabajar de manera constructiva con el Gobierno a fin de abordar con él sus preocupaciones en relación con la privación arbitraria de la libertad. Habida cuenta de que ha transcurrido un período considerable desde su última visita a Bahrein, en octubre de 2001, el Grupo de Trabajo considera que es el momento adecuado para visitar el país de nuevo. En agosto de 2017, el Grupo de Trabajo remitió al Gobierno una solicitud para visitar el país. Dado que Bahrein es actualmente miembro del Consejo de Derechos Humanos, sería oportuno que el Gobierno extendiera una invitación al Grupo de Trabajo para visitar el país, y el Grupo de Trabajo confía en recibir una respuesta favorable a su petición.

Decisión

85. En vista de lo anterior, el Grupo de Trabajo emite la siguiente Opinión:

La privación de libertad de Mohamed Merza Ali Moosa es arbitraria, por cuanto contraviene los artículos 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 19, 20 y 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los artículos 2, párrafo 1, 2, párrafo 3, 9, 14, 16, 19, 21, 22, 25 a) y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y se inscribe en las categorías I, II, III y V.

86. El Grupo de Trabajo pide al Gobierno de Bahrein que adopte las medidas necesarias para remediar la situación del Sr. Moosa sin dilación y ponerla en conformidad con las normas internacionales pertinentes, incluidas las dispuestas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

87. El Grupo de Trabajo considera que, teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso, y en particular el riesgo de que el bienestar físico y psicológico del Sr. Moosa resulte perjudicado, el remedio adecuado sería poner al Sr. Moosa inmediatamente en libertad y concederle el derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación, de conformidad con el derecho internacional.

88. El Grupo de Trabajo insta al Gobierno a que lleve a cabo una investigación exhaustiva e independiente de las circunstancias en torno a la privación arbitraria de libertad del Sr. Moosa, incluidas las alegaciones de tortura, y adopte las medidas pertinentes contra los responsables de la violación de sus derechos.

89. De conformidad con el párrafo 33 a) de sus métodos de trabajo, el Grupo de Trabajo remite el presente caso: a) al Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o

³⁴ Véanse, por ejemplo, las opiniones núms. 31/2019, 79/2018, 51/2018, 13/2018, 55/2016, 35/2016, 41/2015, 23/2015, 37/2014, 34/2014, 27/2014, 25/2014, 22/2014, 1/2014, 12/2013 y 6/2012.

³⁵ Véase, por ejemplo, la opinión núm. 47/2012, párr. 22.

Involuntarias; b) al Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión; c) al Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación; d) al Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; e) al Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados; y f) al Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, para que tomen las medidas correspondientes.

90. El Grupo de Trabajo solicita al Gobierno que difunda la presente opinión por todos los medios disponibles y lo más ampliamente posible.

Procedimiento de seguimiento

91. De conformidad con el párrafo 20 de sus métodos de trabajo, el Grupo de Trabajo solicita a la fuente y al Gobierno que le proporcionen información sobre las medidas de seguimiento adoptadas respecto de las recomendaciones formuladas en la presente opinión, en particular:

- a) Si se ha puesto en libertad al Sr. Moosa y, de ser así, en qué fecha;
- b) Si se han concedido indemnizaciones u otras reparaciones al Sr. Moosa;
- c) Si se ha investigado la violación de los derechos del Sr. Moosa y, de ser así, el resultado de la investigación;
- d) Si se han aprobado enmiendas legislativas o se han realizado modificaciones en la práctica para armonizar las leyes y las prácticas de Bahrein con sus obligaciones internacionales de conformidad con la presente opinión;
- e) Si se ha adoptado alguna otra medida para aplicar la presente opinión.

92. Se invita al Gobierno a que informe al Grupo de Trabajo de las dificultades que pueda haber encontrado en la aplicación de las recomendaciones formuladas en la presente opinión y a que le indique si necesita asistencia técnica adicional, por ejemplo, mediante una visita del Grupo de Trabajo.

93. El Grupo de Trabajo solicita a la fuente y al Gobierno que proporcionen la información mencionada en un plazo de seis meses a partir de la fecha de transmisión de la presente opinión. No obstante, el Grupo de Trabajo se reserva el derecho de emprender su propio seguimiento de la opinión si se señalan a su atención nuevos motivos de preocupación en relación con el caso. Este procedimiento de seguimiento permitirá al Grupo de Trabajo mantener informado al Consejo de Derechos Humanos acerca de los progresos realizados para aplicar sus recomendaciones, así como de todo caso en que no se haya hecho nada al respecto.

94. El Grupo de Trabajo recuerda que el Consejo de Derechos Humanos ha alentado a todos los Estados a que colaboren con el Grupo de Trabajo, y les ha pedido que tengan en cuenta sus opiniones y, de ser necesario, tomen las medidas apropiadas para remediar la situación de las personas privadas arbitrariamente de libertad, y a que informen al Grupo de Trabajo de las medidas que hayan adoptado³⁶.

[Aprobada el 18 de noviembre de 2019]

³⁶ Véase la resolución 42/22 del Consejo de Derechos Humanos, párrs. 3 y 7.